



Asamblea General

Distr. general
15 de marzo de 2024
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

55º período de sesiones

26 de febrero a 5 de abril de 2024

Tema 2 de la agenda

**Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del
Alto Comisionado y del Secretario General**

Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua* **

Resumen

Este informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con su resolución 52/2, contiene una visión general de las constataciones y conclusiones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua con respecto a las graves violaciones de los derechos humanos, los abusos y los crímenes perpetrados en el país desde abril de 2018. En el informe, el Grupo profundiza en su examen y análisis de los patrones de violaciones y abusos y su evolución, incluida la impunidad asociada, así como las responsabilidades conexas. El Grupo se centra en las violaciones y abusos cometidos contra grupos específicos: estudiantes y profesores universitarios, personas indígenas y afrodescendientes, miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, y miembros del movimiento campesino.

* Este informe se presentó a los servicios de conferencias para su tramitación fuera del plazo establecido a fin de incorporar la información más reciente.

** El anexo del presente informe se distribuye como se recibió, únicamente en el idioma en que se presentó.



I. Introducción

A. Antecedentes

1. De conformidad con su resolución 49/3, el Consejo de Derechos Humanos estableció el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, por un período de un año, con el mandato de investigar todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, prestar asesoramiento sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, y formular recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
2. En su resolución 52/2, el Consejo prorrogó el mandato del Grupo por un período de dos años. Sus miembros actuales, Jan-Michael Simon (Presidente), Ángela María Buitrago y Ariela Peralta Distefano, fueron nombrados por el Presidente del Consejo y trabajan a título gratuito como expertos independientes, con el apoyo de una secretaría compuesta por funcionarios de las Naciones Unidas.
3. El Grupo presentó su primer informe al Consejo en su 52º período de sesiones, y concluyó que había motivos razonables para creer que actores estatales y no estatales habían cometido violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales¹. El Grupo determinó que tales violaciones y abusos constituían un ataque sistemático y generalizado contra la población civil llevado a cabo mediante una política discriminatoria promovida por altas autoridades del Estado que buscaban mantener el poder y reprimir cualquier forma de disidencia. El ataque tuvo como consecuencia la destrucción del espacio cívico en Nicaragua, por lo que el Grupo afirmó que había indicios de que se había cometido el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos².
4. En las resoluciones 49/3 y 52/2, el Consejo exhortó al Gobierno de Nicaragua a que cooperase plenamente con el Grupo, entre otros medios permitiéndole el acceso sin trabas, absoluto y transparente a todo el país y proporcionándole la información necesaria para el desempeño de su mandato. El 2 de agosto y el 22 de noviembre de 2023, el Grupo envió nuevas cartas solicitando información al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pero no se ha recibido respuesta alguna. El Grupo envió también al Gobierno la versión preliminar del presente informe. El Gobierno sigue negándose a relacionarse y a cooperar con el Grupo.
5. El Grupo pudo reunir, conservar, corroborar y analizar la información y las pruebas necesarias para establecer los hechos y las circunstancias de las graves violaciones y abusos de los derechos humanos descritos en el presente informe, de conformidad con su mandato, y pese a la falta de cooperación del Gobierno y a los riesgos cada vez mayores para la seguridad de las víctimas, los testigos y otras personas que proporcionan información.
6. El Grupo preparó el presente informe a pesar de los importantes retos derivados de los persistentes retrasos en la contratación de personal de secretaría debidamente cualificado. Además, en febrero de 2024, los recursos no relacionados con puestos, esenciales para cumplir el mandato del Grupo, se han reducido drásticamente. Por lo tanto, desde su creación, el Grupo ha tenido graves dificultades para poder cumplir su mandato. A pesar de esas dificultades, el Grupo expresa su gratitud a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el apoyo de secretaría que presta.

B. Metodología y nivel de prueba exigido

7. El Grupo lleva a cabo sus investigaciones aplicando las metodologías y mejores prácticas establecidas por las Naciones Unidas³, garantizando un enfoque centrado en las

¹ A/HRC/52/63, párr. 123. Véase también el documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que se puede consultar en la página web del mandato: <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ghre-nicaragua/index>.

² A/HRC/52/63, párrs. 109, 110 y 124.

³ Véase el documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo, párrs. 35 a 58.

víctimas que preste especial atención a las dimensiones de género de las violaciones y los abusos. El Grupo también aplica los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, integridad y “no ocasionar daño”.

8. En consonancia con la práctica de los órganos de investigación establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, el Grupo siguió aplicando en sus investigaciones el requisito probatorio de la existencia de “motivos razonables para creer”. Aunque el umbral es inferior al necesario para determinar la responsabilidad en un procedimiento penal, es suficiente para justificar el inicio de investigaciones penales.

9. Para la elaboración del presente informe, el Grupo realizó 642 entrevistas a víctimas, testigos y otras personas que proporcionaron información, tanto a distancia como durante ocho visitas sobre el terreno, y examinó cientos de fuentes secundarias para corroborar y contextualizar la información recopilada. El Grupo estudió rigurosamente esas fuentes para determinar su fiabilidad.

10. El Grupo se aseguró de obtener el consentimiento informado de cada persona entrevistada antes de utilizar la información que había facilitado, y anonimizó la información que identificaba o podía llevar a identificar a víctimas, testigos y otras personas que hubieran facilitado esa información, cuando existían riesgos de represalias contra esas personas o sus familiares. Asimismo, respetó los deseos de las personas que facilitaron información antes de utilizarla. El Grupo expresa su más profunda gratitud a todas aquellas personas que relataron con valentía sus traumáticas experiencias, así como a los defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas, abogados y otros colaboradores por la información facilitada, a pesar de los temores fundados a represalias.

C. Marco jurídico

11. La determinación de los hechos sobre incidentes y patrones de conducta específicos sirvió de base para la calificación jurídica con arreglo al derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos y, en su caso, el derecho penal internacional consuetudinario. El Grupo también tuvo en cuenta las garantías de derechos humanos contenidas en la Constitución, las leyes de Nicaragua y otras disposiciones nacionales pertinentes. El marco jurídico completo que aplica el Grupo figura en las conclusiones detalladas presentadas junto con su primer informe⁴.

12. Atendiendo al componente de rendición de cuentas de su mandato, el Grupo consideró que su objeto y propósito último al analizar los hechos era determinar la existencia de violaciones graves de los derechos humanos. El Grupo entendió que una violación de los derechos humanos se considera grave cuando el Estado tiene la intención de violar la norma⁵. También tuvo en cuenta el alcance y el número de violaciones individuales y el efecto agravante de su magnitud, junto con su prevalencia, naturaleza, interrelación e impacto. En este último caso, consideró tanto el tamaño del grupo que fue objeto de las violaciones como las consecuencias para las víctimas, y también para las personas afectadas de la población general, ajenas al grupo al que se dirigían estas acciones⁶.

II. Constataciones

13. Al preparar el presente informe, el Grupo se centró en los aspectos clave de la evolución de la situación general de los derechos humanos en Nicaragua desde marzo de

⁴ *Ibid.*, párrs. 59 a 74.

⁵ Además, el Grupo interpretó “violación sistemática” como una violación organizada y deliberada.

⁶ Este planteamiento se fundamenta en los documentos de sesión relativos a las violaciones de los derechos a la libertad de circulación y a la nacionalidad; a las violaciones y los abusos de los derechos humanos de los campesinos en Nicaragua, a las violaciones y los abusos de los derechos humanos de miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, a las violaciones y los abusos de los derechos humanos de estudiantes y profesores universitarios y otro personal universitario, y a las violaciones y los abusos de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes. Los documentos podrán consultarse en <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ghre-nicaragua/index>.

2023 e investigó los patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos prevalentes durante el período que abarca el informe.

14. El Grupo también examinó las violaciones y los abusos contra grupos específicos: estudiantes y profesores universitarios, personas indígenas y afrodescendientes, miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, así como miembros del movimiento campesino. Este enfoque no refleja la totalidad de las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua; se adoptó más bien para ilustrar la evolución de la situación de los derechos humanos en el país. Las conclusiones detalladas y las referencias se publican en los documentos de sesión complementarios⁷.

15. En consonancia con su mandato de rendición de cuentas, el Grupo siguió investigando el papel y la estructura de las instituciones del Estado implicadas en las violaciones y en la perpetuación de la impunidad.

A. Aspectos clave de la evolución de la situación de los derechos humanos

1. Persecución generalizada

16. Desde que se publicó el primer informe del Grupo, las autoridades han seguido cometiendo graves violaciones de los derechos humanos para asegurar el control total del Gobierno sobre todos los espacios cívicos de Nicaragua. Basándose en los resultados logrados hasta el momento para erradicar cualquier oposición y crítica, el Gobierno ha adaptado y ampliado la persecución y las formas de represión, silenciando cualquier tipo de crítica o percepción de crítica —por leve que sea—, apuntando a un grupo cada vez mayor de personas, privándolas de sus derechos fundamentales, obligando cada vez a más nicaragüenses a abandonar el país e intimidando a los que ya se han ido.

17. La persecución de los opositores reales o percibidos que permanecen en Nicaragua ha continuado en forma de acoso incesante, amenazas, vigilancia y detenciones arbitrarias, que provocan que las víctimas y sus familiares vivan con un miedo constante. En algunos casos, como el de la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, las autoridades han llegado a privar a las voces disidentes de su identidad legal y de sus medios de vida. El temor fundado a la represión ha hecho que muchas personas se vieran obligadas a abandonar el país, mientras que otras fueron expulsadas por las autoridades.

18. La persecución por parte de las autoridades se ha hecho extensiva a los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero, prohibiéndoles la entrada al país, privándolos de nacionalidad y de identidad legal, negándoles el acceso a documentación oficial y asistencia consular, impidiendo la reunificación familiar, especialmente con niños, y privándolos de los derechos de pensión y los bienes que dejaron en Nicaragua. En ocasiones, las autoridades también han recurrido a vulnerar los derechos humanos de los familiares que permanecen en el país para intimidar o castigar a quienes se marcharon.

19. Abundan los casos tristemente célebres que ilustran el alcance y la intensidad de la persecución actual, como lo ocurrido cuando “Miss Nicaragua” ganó el concurso “Miss Universo”, durante el cual se ondearon banderas nacionales azules y blancas en las calles de Nicaragua para celebrar la victoria. Desde las protestas masivas de abril de 2018, la bandera nacional se ha convertido en un símbolo de oposición al Gobierno.

2. Centralización total de los poderes del Estado en manos del Presidente y de la Vicepresidenta

20. Al contexto de persecución generalizada hay que añadir que todos los poderes del Estado siguieron concentrándose y centralizándose en manos del Presidente y de la Vicepresidenta, quienes ahora controlan totalmente el poder judicial. En octubre de 2023, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue destituida y puesta bajo arresto domiciliario (“casa por cárcel”) *de facto*, presuntamente por orden de la Vicepresidenta. También fueron destituidos el secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia y varios

⁷ Véase <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ghre-nicaragua/index>.

jueces. El Vicepresidente de la Corte Suprema, que también era el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional, asumió como Presidente en funciones. Al parecer, el poder ejecutivo lo destituyó de sus funciones en febrero de 2024. Desde 2018, se ha despedido a más del 10 % del personal del poder judicial.

21. Según varias fuentes, las destituciones y los ceses en el poder judicial tenían como objetivo retirar del cargo a quienes no eran considerados completamente leales al Gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y concentrar el control en manos de unos pocos funcionarios que gozan de la confianza plena del Presidente y la Vicepresidenta. Con esas acciones también se pretendía intimidar a los demás miembros del poder judicial.

22. La toma *de facto* del poder judicial por el ejecutivo demuestra la estrategia del Presidente y de la Vicepresidenta para hacerse con el control total del país a cualquier precio. No solo vulnera de manera flagrante el principio de independencia del poder judicial, sino que además socava aún más las condiciones necesarias para que se celebren juicios imparciales y se acceda a la justicia, por lo que afecta a toda la población.

3. Impunidad total

23. La centralización de todos los poderes del Estado en manos del Presidente y de la Vicepresidenta les garantiza aún más la impunidad total. En el primer informe, el Grupo concluyó que las violaciones de derechos humanos, los abusos y crímenes que había señalado habían quedado totalmente impunes. Esto ha continuado y se ha consolidado aún más a través del control que el poder ejecutivo ejerce sobre el poder judicial. La instrumentalización de todos los poderes del Estado, especialmente del poder judicial, ha impedido que se inicien procedimientos contra los autores o ha evitado que tengan que rendir cuentas mediante la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019.

24. La impunidad total se extiende incluso *de facto* a casos presentados ante jurisdicciones extranjeras en base a la nacionalidad extranjera de la víctima, como en el caso de la ejecución extrajudicial de la estudiante brasileña Raynéia Lima en 2018. Según la información proporcionada por el Ministerio Público del Brasil a los abogados de la madre de la Sra. Lima en mayo de 2023, el Gobierno de Nicaragua respondió negativamente a la solicitud de asistencia jurídica internacional que habían cursado las autoridades brasileñas para acceder al expediente de la persona condenada por el asesinato de la Sra. Lima, afirmando que esa persona había sido amnistiada posteriormente.

25. La Ley de Amnistía garantiza la impunidad de las violaciones y los abusos graves contra los derechos humanos —incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos— relacionados con todos los sucesos acaecidos hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley. La ley acabó con las escasas vías que quedaban para obtener verdad y justicia, dejando a las víctimas y sus familiares sin ningún recurso efectivo en el país. El Grupo hace notar que una amnistía que impide el enjuiciamiento de actos de tortura es incompatible con las obligaciones de Nicaragua en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Una amnistía que exime de castigo otras violaciones graves de derechos humanos es, en general, incompatible con las obligaciones que incumben al país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

B. Confirmación de la tortura

26. El Grupo entrevistó a 73 de las 222 personas que habían estado detenidas arbitrariamente en diversos centros de detención de Nicaragua y posteriormente fueron expulsadas a los Estados Unidos de América en febrero de 2023. Todas las víctimas confirmaron los patrones de malos tratos descritos en el primer informe del Grupo, que, en muchos casos, alcanzaron el umbral de la tortura, debido a la combinación de distintos actos, su carácter prolongado, la presencia de otros factores de estrés o vulnerabilidad y el grave dolor psicológico infligido a las víctimas.

C. Patrones prevalentes de violaciones y abusos

27. El Grupo siguió documentando graves violaciones de los derechos a la libertad y la seguridad de la persona, a las garantías procesales y a un juicio justo, a la libertad de circulación y a la nacionalidad. Las graves violaciones relacionadas con el derecho a la nacionalidad afectan a un número cada vez mayor de personas.

1. Detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a un juicio justo

28. De las numerosas detenciones documentadas por el Grupo durante el período que abarca el informe, destaca una serie de 85 detenciones llevadas a cabo en mayo de 2023 durante operaciones policiales a gran escala en todo el país, coordinadas con el Ministerio Público y el poder judicial. Los detenidos fueron trasladados a Managua, donde comparecieron ante los jueces en audiencias celebradas por la noche. La mayoría de ellos fueron acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y de difusión de noticias falsas a través de las tecnologías de la información. Quedaron en libertad al día siguiente con la condición de presentarse diariamente hasta nuevo aviso en una comisaría determinada. Su situación jurídica sigue siendo incierta. Muchos han optado por abandonar el país ante el constante acoso de las autoridades y la perspectiva de ser procesados y condenados.

29. Según algunas organizaciones de la sociedad civil, en febrero de 2024 seguían privados de libertad 121 opositores reales o percibidos (102 hombres y 19 mujeres). Más de dos tercios habían sido detenidos en 2023. La mayoría había sido acusada de delitos relacionados con el narcotráfico, la difusión de noticias falsas a través de las tecnologías de la información o conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Más de dos tercios de las personas detenidas arbitrariamente fueron condenadas.

30. El perfil de las víctimas de detención arbitraria siguió siendo diverso: había miembros de distintos sectores de la sociedad como sacerdotes, seminaristas, periodistas, empleados del poder judicial, jueces, líderes indígenas, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos políticos y campesinos. Todos eran opositores al Gobierno, reales o percibidos. Los familiares de las víctimas fueron a su vez elegidos como víctimas por el solo hecho de estar vinculados con opositores.

31. Las autoridades siguieron los mismos patrones y *modus operandi* ya señalados en el primer informe del Grupo: la policía llevó a cabo los allanamientos sin orden de registro y privó de libertad a las personas sin órdenes de detención. La mayoría de los detenidos fueron trasladados a la comisaría o los juzgados del Distrito III de Managua y posteriormente enviados a centros de detención de la capital.

32. A los detenidos no se les permitió ninguna comunicación con sus familias ni con sus abogados. En algunos casos, tras ser detenidos, estuvieron en paradero desconocido durante largos períodos de tiempo y los tribunales no admitieron ningún recurso de exhibición personal (*habeas corpus*). Los detenidos no tuvieron acceso a un abogado defensor de su elección. Las vistas se celebraron a puerta cerrada y los acusados solo pudieron participar por videoconferencia. Todos los casos se asignaron al mismo número reducido de fiscales y jueces de Managua, independientemente del lugar donde se hubiera cometido el presunto delito.

2. Violaciones de los derechos a la libertad de circulación y a la nacionalidad

33. Las violaciones graves y sistemáticas de los derechos a la libertad de circulación y a la nacionalidad, como instrumentos para perseguir y silenciar a cualquier opositor del Gobierno, real o supuesto, han provocado (y siguen provocando) múltiples violaciones adicionales de los derechos humanos de tal alcance que son imposibles de cuantificar, lo que demuestra que las autoridades tienen la intención de incapacitar implacablemente toda oposición a largo plazo.

34. El Grupo comprobó que todas las personas objeto de violaciones del derecho a la libertad de circulación y a la nacionalidad, pertenecientes a distintos sectores de la sociedad, eran opositoras del Gobierno, reales o percibidas, o familiares de opositores.

a) Expulsión de nacionales y extranjeros

35. Las violaciones del derecho a la libertad de circulación de nacionales y extranjeros se vienen cometiendo desde 2018, pero se incrementaron en 2022 y, especialmente, en 2023. Hasta la fecha, el Grupo ha documentado 21 expulsiones de extranjeros y 263 expulsiones de nicaragüenses, de carácter tanto individual como colectivo, sin las debidas garantías procesales.

36. Como se señaló en el primer informe del Grupo, el 9 de febrero de 2023, el Gobierno expulsó a los Estados Unidos a 222 personas (189 hombres y 33 mujeres) que habían sido privadas de libertad arbitrariamente, después de que el Tribunal de Apelaciones de Managua dictara una orden de deportación en la que los había declarado traidores a la patria⁸. Posteriormente ha habido más expulsiones de nacionales, muchas de ellas se llevaron a cabo sin que se publicara ninguna resolución judicial, de manera que las víctimas no sabían si habían sido despojadas oficialmente de su nacionalidad o no. A su vez, esto ha generado obstáculos para solicitar protección a otros Estados, dejando a las víctimas en una situación de gran vulnerabilidad, que se añade al sufrimiento por haber sido objeto de otras violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua.

b) Privación de la nacionalidad

37. En su primer informe, el Grupo documentó brevemente que, días antes de que se publicara ese informe, se había privado arbitrariamente de la nacionalidad a 316 opositores reales o percibidos, con arreglo a decisiones judiciales que se basaban en una reforma constitucional que no estaba en vigor en ese momento. Para el presente informe, el Grupo ha profundizado en la investigación de estos casos, especialmente en los múltiples y variados efectos de las violaciones sobre las víctimas.

38. La mayoría de las personas a las que se ha privado de nacionalidad son ahora apátridas. Las decisiones se adoptaron por motivos discriminatorios, y no se respetaron las debidas garantías procesales. Las víctimas se quedaron sin acceso a ningún recurso efectivo y en una situación de vulnerabilidad extrema.

39. Al privar de nacionalidad a los nicaragüenses, las autoridades los privaron también de varios derechos humanos conexos. Se han suprimido actas del registro civil, incluidas actas de nacimiento, despojando a las víctimas de su identidad jurídica. La medida también ha afectado a los familiares de las víctimas, ya que se han suprimido o modificado los registros de matrimonio y las actas de nacimiento de los hijos, entre otros. Muchas víctimas han sufrido también la confiscación de propiedades y cuentas bancarias y, en algunos casos, la cancelación de sus pensiones. Asimismo, a muchos se les ha revocado el título universitario o se les ha borrado el expediente universitario.

c) Prohibición de entrar en el propio país o salir de él

40. El Grupo ha documentado 145 casos de nicaragüenses que tienen prohibida la entrada en el país. Denegar la entrada al propio país constituye un patrón de violación al que las autoridades nicaragüenses han recurrido cada vez más, especialmente desde 2023. Esta práctica no solo vulnera el derecho a la libertad de circulación y a la libre elección de residencia, sino que deja a las víctimas en condiciones de gran vulnerabilidad, separadas de su familia, sin acceso a redes de apoyo ni recursos económicos, y sin ningún tipo de protección o apoyo por parte de su país de nacionalidad, condiciones similares a las de la apatridia.

41. Las prohibiciones de entrada han dado lugar a otras graves violaciones de los derechos de las víctimas, como el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegítimas en la vida familiar, a la educación, el trabajo, la atención sanitaria, la seguridad social y a unas condiciones de vida adecuadas. Las prohibiciones también han afectado a los familiares de las víctimas que permanecen en Nicaragua, especialmente las personas mayores y los niños,

⁸ A/HRC/52/63, párr. 106; y el documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo, párr. 770.

puesto que suelen depender económicamente de las personas a las que se ha prohibido entrar en el país.

42. Además, el Grupo ha documentado casos de nicaragüenses a quienes se prohibió abandonar el país, e incluso se les llegó a confiscar el pasaporte, sin respetar el debido proceso, al intentar salir de Nicaragua por un puesto fronterizo oficial. Se enviaron a los funcionarios de los puestos fronterizos listas en las que figuraban los nombres de los opositores, reales o percibidos, a quienes se debía denegar la salida del país. El Grupo también determinó que los funcionarios que deseen viajar al extranjero deben obtener una autorización previa del Gobierno. En un número considerable de casos, dichas autorizaciones fueron denegadas.

d) Violaciones de los derechos humanos de los familiares

43. El Grupo ha documentado que algunas personas han sido perseguidas únicamente por tener vínculos familiares con los objetivos principales de las autoridades. Entre los derechos vulnerados de los familiares cabe destacar la confiscación de propiedades, la cancelación de pensiones, la prohibición de entrar en el país o salir de él y la confiscación o negativa a expedir pasaportes.

44. Los niños han sido discriminados, sometidos a otro tipo de persecución y sus derechos se han visto afectados deliberadamente en razón de la condición, las actividades u opiniones de sus padres, madres u otros familiares, en contravención de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se ha separado a niños de sus progenitores a quienes se expulsó de Nicaragua o se prohibió la entrada al país, y al parecer también se los ha separado al negar a esos niños un pasaporte válido que les permitiera reunirse con sus progenitores en el extranjero.

3. Exilio masivo

45. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en junio de 2023, había 271.740 nicaragüenses solicitantes de asilo y 18.545 que habían obtenido la condición de refugiado en todo el mundo⁹.

46. En todos los casos documentados por el Grupo, las personas que habían huido de Nicaragua sufrieron una o más de las violaciones o abusos referidos en sus informes. En muchas ocasiones, se vieron obligados a huir por estar expuestos a un entorno intimidatorio o coercitivo creado por diversos actos represivos que equivalían a la expulsión u otras formas de coacción. Para ello fueron decisivas las detenciones arbitrarias y las violaciones del derecho a un juicio justo.

D. Perfiles de las víctimas atacadas desde abril de 2018

47. Las personas que fueron objeto de ataques por parte del Estado presentan perfiles variados. Se las escoge como víctima en función de su identidad y su rol dentro de grupos sociales específicos, considerados obstáculos para que el Gobierno consiga su objetivo general de silenciar cualquier oposición o crítica, especialmente en el caso de las víctimas señaladas por pertenecer al sector universitario, ser indígenas o afrodescendientes, pertenecer a la Iglesia católica u otras confesiones cristianas, o al movimiento campesino. Para eliminar de raíz cualquier obstáculo, el Gobierno ataca sobre todo a los líderes de esos movimientos o comunidades.

1. Estudiantes y profesores universitarios y otro personal universitario

48. En su primer informe, el Grupo señaló que el movimiento estudiantil había desempeñado un papel crucial en las protestas de 2018 y que el Gobierno lo consideraba una amenaza. Los estudiantes sufrieron violaciones y abusos graves y sistemáticos de los

⁹ Véase ACNUR, Refugee Data Finder. Puede consultarse en <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=Z41RSg>. Véase también ACNUR, *Consideraciones de protección internacional con respecto a las personas que huyen de Nicaragua*, HCR/PC/NIC/2023/01, pág. 48.

derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a la integridad personal, a la reunión pacífica y a la libertad de expresión y asociación.

49. El impulso del movimiento estudiantil se hizo particularmente evidente cuando los estudiantes se unieron a la mesa redonda celebrada en mayo de 2018 en el marco del proceso de diálogo nacional, en el que mediaron miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua¹⁰. Para el presente informe, el Grupo siguió investigando las violaciones y los abusos de los derechos humanos perpetrados contra estudiantes y profesores universitarios y autoridades académicas, y el ataque a la autonomía de las universidades en su conjunto, factores que, combinados, fueron determinantes para dismantelar la universidad como espacio para las voces críticas organizadas de estudiantes y académicos.

50. Muchos estudiantes, y especialmente líderes estudiantiles, han sido detenidos arbitrariamente y procesados sobre la base de acusaciones falsas o fabricadas y sin las debidas garantías procesales. Además, varios fueron sometidos a actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Del grupo de 222 víctimas expulsadas arbitrariamente del país y despojadas de nacionalidad en febrero de 2023, siete eran líderes estudiantiles, dos de ellos habían participado en los diálogos nacionales celebrados en 2018 y 2019.

51. Muchos estudiantes han sido expulsados arbitrariamente de la universidad, no solo por las autoridades estatales, sino también por grupos no estatales alineados con el Gobierno, como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Han sufrido hostigamiento y amenazas por parte de autoridades y grupos no estatales alineados con el Gobierno y se les ha negado el acceso a sus expedientes académicos y certificados, de manera que no han podido continuar sus estudios.

52. Las acciones represivas del Gobierno también afectaron a profesores que habían apoyado a los estudiantes durante las manifestaciones o eran considerados opositores al Gobierno. Cientos de profesores universitarios fueron despedidos entre mayo de 2018 y diciembre de 2023, sin el debido proceso, y sin posibilidad de apelar la decisión o recibir una indemnización. Varios profesores universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Muchos se vieron obligados a huir del país, pues tenían motivos fundados para temer una detención arbitraria, y a otros se les impidió regresar a Nicaragua.

53. En diciembre de 2021, la Asamblea Nacional comenzó a cancelar la personalidad jurídica de las universidades. A finales de 2022, esta tarea se reasignó al Ministerio del Interior. Se ha cancelado la personalidad jurídica de 38 instituciones de educación superior, lo que supuso el cierre de casi todas las universidades privadas del país. Las cancelaciones formaban parte de la estrategia general de las autoridades para destruir el espacio cívico mediante la revocación de la personalidad jurídica de más de 3.000 organismos sin fines de lucro y partidos políticos, y el cierre forzoso de más de 40 medios de comunicación¹¹.

54. Un ejemplo de ello es el cierre de la Universidad Centroamericana de la Compañía de Jesús (jesuitas) en agosto de 2023, tras una sentencia judicial que declaraba que los directivos de la universidad habían violentado la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo de Nicaragua al incitar a la desestabilización del país. El juzgado ordenó la confiscación de todos los bienes, incluidas las cuentas bancarias, de la Universidad, y el Ministerio del Interior canceló su personalidad jurídica. Se congelaron las cuentas bancarias de la Universidad, así como las cuentas bancarias personales de sus directivos. Tres lideresas estudiantiles que protestaban contra el cierre de la Universidad fueron detenidas ilegalmente y más tarde condenadas. La Junta Directiva de la Universidad y varios profesores huyeron de Nicaragua, pues tenían motivos fundados para temer una detención arbitraria. Quienes se quedaron han sufrido discriminación al buscar un nuevo empleo.

55. El cierre de la Universidad Centroamericana afectó a más de 5.000 estudiantes que vieron interrumpidos sus estudios de forma abrupta y arbitraria. Muchos no pudieron

¹⁰ Documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo, párr. 289.

¹¹ *Ibid.*, párrs. 735 a 744, 906 a 920 y 1179.

continuar realizando estudios superiores ya que se les negó la matrícula en otras instituciones académicas por su vinculación con dicha Universidad. En diciembre de 2023, comenzó a funcionar una nueva universidad pública, la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, que se creó con los bienes confiscados a la Universidad Centroamericana. El Grupo puede confirmar que a muchos estudiantes se les volvió a denegar la matrícula porque habían estado vinculados a la Universidad Centroamericana o porque ellos o sus familiares eran opositores reales o percibidos del Gobierno.

56. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta agosto de 2023, las cancelaciones de la personalidad jurídica de las instituciones académicas habían afectado el derecho a la educación de unos 37.000 estudiantes¹². En 2023 se crearon cinco nuevas universidades públicas utilizando el patrimonio de varias de las universidades cuya personalidad jurídica había sido cancelada.

57. En 2022, la Asamblea Nacional socavó aún más la autonomía universitaria y la libertad académica al eliminar el Consejo Nacional de Rectores, que hasta ese momento había estado a cargo de las políticas públicas en materia de educación superior. En su lugar, se hizo con el control del sistema de educación superior el Consejo Nacional de Universidades, cuyos directivos están vinculados al Gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Para consolidar aún más este control, la Asamblea Nacional decidió en 2023 que, en adelante, el Presidente nombraría a los directores del Consejo Nacional de Universidades.

58. El Grupo ha confirmado que el desmantelamiento de la autonomía universitaria, junto con la cancelación de la personalidad jurídica de las universidades y las violaciones de los derechos humanos cometidas contra líderes estudiantiles, profesores y otro personal universitario que se han documentado hasta el momento, han dado lugar a un sector universitario que ya no cuenta con instituciones autónomas. El Gobierno ha logrado suprimir a largo plazo cualquier voz crítica organizada de estudiantes y académicos en Nicaragua, y esto afecta el derecho a la educación de miles de estudiantes.

2. Pueblos Indígenas y afrodescendientes

59. Los líderes, activistas y defensores indígenas y afrodescendientes, así como las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de estos pueblos, han estado y siguen estando sometidos a la represión gubernamental. En abril de 2018, el partido político Movimiento Indígena de la Costa Atlántica (YATAMA, de Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka en misquito) y miembros de la sociedad civil convocaron protestas en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe. Las demandas de los manifestantes se centraron en antiguas reivindicaciones relacionadas con los derechos a la tierra, el territorio y la autonomía. Las protestas estallaron de nuevo tras las denuncias de fraude en las elecciones regionales de 2019 y en las municipales de 2022. Las fuerzas de seguridad y los grupos progubernamentales reprimieron sistemáticamente todas las protestas.

60. El Grupo constató que los actos de violencia dirigidos contra miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes aumentaron significativamente a partir de 2018. Las autoridades del Estado han atacado a líderes y activistas con poder de convocatoria o que se mostraban particularmente críticos contra el Gobierno o en su defensa de los derechos territoriales y ambientales. Los actos de represión consistieron en acoso, amenazas, criminalización, detención arbitraria, confiscación de bienes y prohibición de entrar en el país. Como consecuencia, muchos líderes y activistas se han visto obligados a esconderse o huir del país, como la líder mayangna ulwa Haidey Merly Bautista Salazar y el precandidato presidencial y líder creole afrodescendiente George Henríquez Cayasso. A algunos se les negó la reentrada en el país, como a la miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Anexa Alfred Cunningham, del pueblo misquito.

61. Desde marzo de 2022, las autoridades también han cancelado la personalidad jurídica de más de un centenar de organizaciones de Pueblos Indígenas y afrodescendientes, así como de organizaciones de derechos humanos y desarrollo. Un objetivo particular ha sido el partido

¹² Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Nicaragua: CIDH y sus Relatorías Especiales condenan interferencias arbitrarias a la libertad académica”, comunicado de prensa núm. 201/23, 29 de agosto de 2023.

YATAMA, desde que abandonó, en el contexto del proceso electoral presidencial de 2021, una alianza de larga data con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Al líder del partido y diputado de la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera Bryan, se le negó la reentrada al país en abril de 2023. Regresó clandestinamente y fue detenido el 29 de septiembre de 2023. Desde entonces, las autoridades no han facilitado información sobre su suerte o paradero. Pocos días después de su detención, la policía detuvo a la diputada suplente de YATAMA, Nancy Elizabeth Henríquez James. Al cabo de diez días en los que no se dio ninguna información sobre su paradero, fue condenada a ocho años de cárcel por difusión de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. El 3 de octubre de 2023, antes de las elecciones regionales previstas para el 3 de marzo de 2024, el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica de YATAMA.

62. El Grupo constató que la represión descrita en el párrafo anterior está estrechamente relacionada con los esfuerzos encaminados a consolidar y ampliar el control político y económico del Gobierno sobre las regiones autónomas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se ha esforzado por penetrar en las estructuras de gobierno autónomo de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes, ya sea por cooptación o por coacción, imponiendo el nombramiento de simpatizantes del partido al frente de las autoridades comunitarias y territoriales. Dominar las estructuras de autogobierno también es fundamental para mantener el control económico sobre el territorio y los recursos de las regiones autónomas, en consonancia con actividades económicas estratégicas como la minería de oro y la ganadería.

63. La represión dirigida por el Estado contra líderes y organizaciones indígenas y afrodescendientes se ha llevado a cabo en un contexto de violencia generalizada de colonos armados cuya presencia en las regiones autónomas ha ido en continuo aumento, usurpando tierras comunales. El Grupo ha determinado que, desde 2018, las agresiones violentas por parte de colonos causaron la muerte de 46 personas —33 por arma de fuego—, principalmente en el territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. En algunos casos, los cadáveres recuperados presentaban signos de tortura y mutilación. Las mujeres y niñas fueron víctima de violencia sexual; se quemaron las casas de miembros de las comunidades y se desplazó por la fuerza a familias.

64. El Grupo ha determinado que las autoridades del Estado no solo no aplicaron medidas de prevención eficaces para proteger la vida y la integridad de los miembros de las comunidades, sino que tampoco llevaron a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas. En lugar de ello, las autoridades han negado públicamente la responsabilidad de los colonos por los delitos señalados, e incluso procesaron a miembros de las comunidades afectadas por algunos de los delitos y les impusieron duras sanciones.

65. El Grupo ha confirmado que, mediante las violaciones documentadas hasta el momento contra miembros de Pueblos Indígenas y personas afrodescendientes, las autoridades se han acercado a su objetivo de eliminar el obstáculo que suponen las voces críticas organizadas en el seno de esos grupos. Según indica la información que ha recopilado el Grupo, el Gobierno se está sirviendo de los colonos para reconfigurar las tierras comunales, hacerse con el control y explotarlas. Sin embargo, dada la complejidad de la situación y las limitaciones de tiempo, el Grupo no pudo investigar más a fondo los hechos y las pruebas. Con sujeción a los recursos de que disponga, el Grupo seguirá investigando este asunto.

3. Miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas

66. Desde abril de 2018, se ha intensificado la represión contra la Iglesia católica¹³. Las autoridades comenzaron a recurrir al discurso de odio y a calificar a los sacerdotes de “golpistas”, “terroristas” o “agentes del diablo”, en respuesta a las críticas a la situación de los derechos humanos expresadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y por la Arquidiócesis de Managua, así como por algunos sacerdotes en sus homilías. Siguiendo el ejemplo del Presidente y la Vicepresidenta, se ha difundido a través de los medios de

¹³ A/HRC/52/63, párrs. 45 y 61; y documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo, párrs. 837 a 852.

comunicación afines al Gobierno el discurso de odio, incitando a la violencia y la discriminación contra la Iglesia católica.

67. Durante las protestas masivas de 2018, se detuvo a varios sacerdotes católicos. Fueron detenciones breves, con las que se pretendía socavar el apoyo a las protestas. A partir de agosto de 2022, los miembros del clero han estado detenidos durante períodos más largos y han sido condenados por delitos como conspiración y difusión de noticias falsas. El Grupo ha documentado dos casos de detenciones masivas: uno en octubre de 2023 y otro entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Un total de 31 sacerdotes y seminaristas fueron detenidos y expulsados al Vaticano, algunos de ellos a los pocos días de su detención, sin que se hubieran presentado cargos formales contra ellos. En muchos casos, se desconoció el paradero desde el momento de la detención hasta la expulsión.

68. El Grupo constató que, entre febrero de 2023 y enero de 2024, decenas de sacerdotes, frailes y seminaristas católicos nicaragüenses fueron expulsados del país o se les negó la entrada en él y fueron privados arbitrariamente de nacionalidad. En 2024 se expulsó del país a un obispo nicaragüense al que se había prohibido salir de Nicaragua y se había confiscado el pasaporte en 2021. Además, decenas de clérigos se han visto obligados a abandonar el país por el hostigamiento, las amenazas de muerte y las agresiones sufridas, o por tener motivos fundados para temer una detención arbitraria. Se ha expulsado de manera arbitraria a decenas de clérigos y monjas extranjeros que residían legalmente en el país, ya que las autoridades se negaron a renovar sus permisos de residencia o cancelaron la personalidad jurídica de sus organizaciones.

69. Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, permaneció bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto de 2022, cuando fue detenido arbitrariamente. El 10 de febrero de 2023, tras su negativa a ser expulsado a los Estados Unidos, Monseñor Álvarez fue condenado a más de 26 años de prisión por traición, menoscabo a la integridad nacional y difusión de noticias falsas. También fue privado arbitrariamente de su nacionalidad, lo que lo dejó en situación de apatridia *in situ*¹⁴. Monseñor Álvarez fue trasladado al complejo carcelario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, donde permaneció recluido en régimen de aislamiento en una celda de castigo situada en una sección conocida como “el infiernillo”. Durante 43 días no se comunicó a su familia ninguna información sobre sus condiciones de reclusión. Monseñor Álvarez fue desterrado arbitrariamente al Vaticano el 13 de enero de 2024, junto con otros 18 clérigos.

70. Las acciones represivas de las autoridades contra la Iglesia católica también se han dirigido contra fieles, empleados y “colaboradores” laicos. Desde junio de 2023, las autoridades prohibieron *de facto* las procesiones católicas. Las fiestas patronales quedaron prohibidas o fueron instrumentalizadas por el Gobierno. También se han prohibido las misas celebradas fuera de las iglesias, como fue el caso de la misa del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 2023. El 18 de agosto de 2023, el periodista Víctor Ticay fue condenado a ocho años de cárcel por haber retransmitido una procesión religiosa. En diciembre de 2023, varias personas que habían trabajado en Cáritas Diocesana de Estelí, clausurada por las autoridades, fueron condenadas a seis años de prisión por lavado de dinero.

71. La represión gubernamental también se ha dirigido contra líderes de otras confesiones cristianas. El Grupo ha documentado el hostigamiento, las agresiones físicas y verbales y la criminalización de varios pastores evangélicos. Wilber Alberto Pérez, que participó en una campaña denominada “Navidad sin presos políticos”, fue condenado a 12 años de prisión por presunto tráfico de drogas. Fue expulsado del país y privado arbitrariamente de su nacionalidad en febrero de 2023. Once pastores de la organización evangélica Puerta de la Montaña fueron detenidos en diciembre de 2023 acusados de presunto lavado de dinero y permanecen recluidos. También se ha prohibido a algunas iglesias evangélicas celebrar actos públicos.

72. El Grupo sigue documentando la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones, entidades y medios de comunicación religiosos. Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en 2023 se canceló la personalidad jurídica de al menos 342 organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas, a la Iglesia católica y otras

¹⁴ Documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo, párrs. 846 y 847.

confesiones cristianas, cuyas propiedades e instalaciones quedaron confiscadas. Algunas de esas organizaciones tenían un largo arraigo en el país, como Cáritas Nicaragua, la Orden Franciscana, la Compañía de Jesús (jesuitas) y la Misión Cristiana Verbo. También en 2023 se canceló la personalidad jurídica de cinco instituciones católicas de educación superior, entre ellas la Universidad Centroamericana, y tres universidades de otras confesiones cristianas. En mayo de 2023, se congelaron las cuentas bancarias de todas las diócesis católicas, supuestamente para aplicar la legislación nicaragüense contra el lavado de dinero, y también las cuentas de algunas parroquias y sacerdotes. Esta práctica corresponde con las conclusiones del primer informe del Grupo sobre el uso indebido de la legislación contra el lavado de capitales para perseguir a los opositores al Gobierno y restringir la existencia de la sociedad civil por motivos políticos¹⁵.

73. El Grupo ha confirmado que las violaciones documentadas hasta ahora contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas han acercado a las autoridades a su objetivo de eliminar el obstáculo de las voces cristianas críticas organizadas contra el Gobierno.

4. Miembros del movimiento campesino

74. En abril de 2018, el movimiento campesino se unió a las protestas sociales lideradas por los estudiantes. Los líderes del movimiento pusieron al servicio de las protestas la experiencia de resistencia organizada que habían adquirido en luchas anteriores. La capacidad del movimiento para movilizar y organizar a la población planteaba una importante amenaza para el control del Gobierno. El impulso del movimiento campesino se hizo especialmente evidente cuando, en 2018, se sumó al diálogo nacional. Durante el diálogo, que duró un mes, los campesinos siguieron organizándose en todo el país y rechazaron la exigencia del Gobierno de dismantelar los tranques de carreteras que habían preparado.

75. El Grupo ha determinado que la policía y los grupos armados progubernamentales hicieron un uso excesivo de la fuerza, incluso de armas letales, para responder a las protestas de 2018 y dismantelar los tranques de carreteras que organizaron los campesinos. El Grupo ha determinado también que los campesinos fueron objeto de vigilancia y hostigamiento sistemáticos por parte de miembros de estructuras de participación ciudadana (los llamados “Consejos de Poder Ciudadano”), grupos armados progubernamentales y la policía. Muchos quedaban excluidos arbitrariamente de cualquier oportunidad social, laboral o educativa, y eran discriminados constantemente en los procesos administrativos y en el acceso a la salud y a otros servicios públicos. Además, la policía y los grupos armados progubernamentales agredían regularmente a los campesinos y los amenazaban de muerte, con encarcelarlos y destruir sus propiedades para impedir que participaran en cualquier actividad de protesta contra el Gobierno.

76. Una vez que el Gobierno sofocó las protestas, casi la mitad de los líderes nacionales del movimiento campesino fueron detenidos arbitrariamente, mientras que el resto tuvo que huir del país o pasar a la clandestinidad, rompiendo todos los vínculos con el movimiento, que quedó sin liderazgo. También se detuvo arbitrariamente a muchos miembros ordinarios del movimiento. Muchas detenciones no se denunciaron por temores fundados a represalias y por la desconfianza en el sistema de justicia. Una vez liberados, los campesinos han estado sometidos continuamente a hostigamiento, vigilancia, amenazas e intimidaciones por parte de la policía y miembros de grupos armados progubernamentales, quienes también han amenazado a sus familias, impidiéndoles realizar sus actividades cotidianas.

77. Las autoridades instrumentalizaron el derecho penal para dismantelar cualquier intento de organización por parte de la población campesina y para reprimir cualquier crítica u oposición. El Grupo ha documentado los casos de 33 campesinos, 21 de ellos dirigentes o miembros del movimiento campesino, que fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a largos interrogatorios y a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. De ellos, 23 fueron condenados, sin las debidas garantías procesales ni un juicio justo, a penas de prisión por cargos infundados y desproporcionados relacionados con su activismo político,

¹⁵ [A/HRC/52/63](#), párr. 91; y documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo, párrs. 534 a 539, 691, 726 a 734, 784 y 1178.

sobre la base de leyes incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos o de pruebas falsas.

78. El ambiente coercitivo, el miedo generalizado y el encarcelamiento de líderes campesinos han tenido un efecto disuasorio que dio lugar al cese de todas las actividades de movilización y organización y obligó a gran parte de la población campesina que había participado en las protestas a replegarse en sus fincas, trasladarse a otras regiones del país o huir de Nicaragua. De los 85 campesinos a los que entrevistó el Grupo, 43 habían huido del país entre 2018 y 2020 (22 hombres y 21 mujeres) por temores fundados relacionados con su propia seguridad y la de sus familiares; 19 (15 hombres y 4 mujeres) abandonaron el país después de que se intensificara la represión política en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021, y 16 fueron expulsados a los Estados Unidos inmediatamente después de salir de prisión y privados arbitrariamente de nacionalidad.

79. Las violaciones contra miembros del movimiento campesino documentadas hasta ahora han logrado suprimir a largo plazo cualquier voz campesina crítica organizada en Nicaragua. El Grupo ha recibido información sobre un número considerable de asesinatos de campesinos, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, que podrían constituir un patrón de violaciones del derecho a la vida. Por el momento, el Grupo no ha podido corroborar la información. Con sujeción a la disponibilidad de recursos, el Grupo seguirá investigando este asunto.

III. Violaciones y abusos graves de los derechos humanos

80. Sobre la base de los resultados de sus investigaciones, el Grupo tiene motivos razonables para creer que los hechos descritos en el presente informe y en los documentos de sesión son representativos de patrones más amplios de conducta y constituyen violaciones y abusos graves del derecho internacional de los derechos humanos que se han perpetrado por motivos políticos de forma sistemática y generalizada en todo el territorio nacional.

81. Las violaciones y los abusos han menoscabado el disfrute de un amplio abanico de derechos: la protección frente a la discriminación, la protección frente a la tortura, la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a un juicio justo y a las debidas garantías procesales, a un recurso efectivo, a la libertad de circulación, a una nacionalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad frente a injerencias en la vida privada y familiar, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la participación en los asuntos públicos, a la educación y la libertad académica, al trabajo, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado. Las violaciones y los abusos también han afectado a los derechos del niño a no ser objeto de discriminación de ningún tipo, independientemente de la opinión política o de otra índole del niño o de sus padres o tutores legales; a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas, y a no ser separado de sus padres sin revisión judicial y sin que se respete el debido proceso.

IV. Crímenes de lesa humanidad

82. Anteriormente, el Grupo había encontrado motivos razonables para concluir que, desde abril de 2018, diversos agentes estatales y no estatales, siguiendo órdenes del Presidente y de la Vicepresidenta, habían perpetrado graves violaciones y abusos de los derechos humanos contra parte de la población nicaragüense en razón de su identidad política. Se determinó que esas conclusiones eran compatibles *prima facie* con los elementos que constituyen el marco de la prohibición internacional y la definición de crímenes de lesa humanidad del derecho penal internacional¹⁶.

83. De conformidad con el derecho internacional, se considera que la duración del elemento compuesto del “ataque”, en virtud de la cual un acto prohibido se convierte en crimen de lesa humanidad, persiste mientras existan pruebas de que el ataque se dirige contra

¹⁶ A/HRC/52/63, párrs. 109 a 115, 123 y 124.

la población civil en su conjunto y no contra miembros específicos¹⁷, incluso en caso de que la magnitud y la intensidad del ataque disminuyan con el tiempo a medida que la parte atacante comienza a lograr sus objetivos¹⁸. El Grupo tiene motivos razonables para creer que, lejos de haber cesado, el ataque contra parte de la población nicaragüense continúa, e incluso se cobra un número de víctimas cada vez mayor.

84. Entre los perfiles de las víctimas suele haber miembros y dirigentes de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, del movimiento campesino, del sector universitario, y miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas. Todas esas víctimas han sido objeto de ataques en razón de su identidad política, siguiendo una política discriminatoria destinada a perseguir y silenciar sistemáticamente a cualquier persona y a clausurar cualquier organización cívica o política que mantenga, o parezca mantener, una posición diferente a la del Gobierno. Cualquiera que sea percibido como crítico o adversario del Gobierno o, incluso, que parezca no ser lo suficientemente leal al Gobierno puede encajar en el perfil general de víctima.

85. El Gobierno ha desarrollado y ampliado aún más sus patrones de victimización. El Grupo tiene motivos razonables para creer que, durante el período que abarca el informe, se han perpetrado en Nicaragua los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento y deportación, y que esos crímenes se perpetraron en el contexto de una política discriminatoria para perseguir y silenciar sistemáticamente a los opositores, reales o percibidos, aplicada intencionalmente desde las más altas instancias del Gobierno, lo que constituye *prima facie* el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.

86. El Grupo ha documentado un nuevo conjunto de actos ilegales llevados a cabo sistemáticamente contra opositores, reales o percibidos, con miras a asegurar, mediante la violación de múltiples derechos humanos, la eliminación de cualquier amenaza que estas personas pudieran suponer para el Gobierno del Presidente Ortega y de la Vicepresidenta Murillo. Las víctimas no solo fueron deportadas y privadas de nacionalidad arbitrariamente, sino que también fueron despojadas de sus derechos civiles y políticos y sufrieron numerosas violaciones de sus derechos sociales y económicos, todo ello, mientras se encontraban fuera de Nicaragua en un estado de vulnerabilidad. Además, las víctimas fueron atacadas a través de sus familiares en Nicaragua, quienes a vez se vieron expuestos a violaciones de los derechos humanos. Las acciones del Gobierno se concibieron como herramienta no solo para dismantelar los esfuerzos de oposición activa, sino para suprimir todas las voces críticas y disuadir de cualquier nueva iniciativa de organización en ese sentido.

87. El crimen de lesa humanidad de persecución puede derivarse, no solo de los actos prohibidos de carácter estándar, sino de violaciones graves de los derechos humanos llevadas a cabo por motivos discriminatorios, siempre que los actos de persecución tengan por objeto y resultado la violación del disfrute de un derecho básico o fundamental de una persona. Las víctimas han sufrido un cúmulo de actos graves, ilícitos y prohibidos que tienen como resultado la violación de derechos humanos fundamentales. El Grupo tiene motivos razonables para creer que estas violaciones también se perpetraron intencionadamente en el contexto de la política discriminatoria antes descrita y que el efecto acumulativo de estas violaciones constituye *prima facie* el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.

V. La estructura organizada de poder del Estado represor

88. El Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo controlan todos los demás poderes e instituciones del Estado. El Grupo comprobó que el Presidente y la Vicepresidenta dan órdenes e instrucciones, ya sea directamente o a través de asesores de confianza, a las diferentes instituciones que luego se encargan de llevar a cabo actos represivos contra

¹⁷ Documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo, párr. 976. Véase también Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, *Prosecutor v. Jovica Stanišić and Franko Simatović*, causa núm. IT-03-69-T, fallo, 30 de mayo de 2013, párr. 971.

¹⁸ Guénaél Mettraux, *International Crimes: Law and Practice – Volume II: Crimes against Humanity* (Oxford, Oxford University Press, 2020), pág. 207.

opositores reales o percibidos y sus familiares. La estructura política del Frente Sandinista de Liberación Nacional, especialmente sus secretarios políticos, así como los servicios de inteligencia del Estado, han sido decisivos para ejercer ese control.

89. El Grupo ha confirmado que el Presidente y la Vicepresidenta instrumentalizaron el poder legislativo para cometer las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad documentados en el presente informe. El Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, ha apoyado al Gobierno promoviendo la adopción de reformas constitucionales y de leyes que facilitan la comisión de actos represivos. La Asamblea Nacional ha aprobado varias reformas constitucionales que entraron en vigor sin seguir el proceso establecido en la Constitución. Al menos tres de esas reformas se aprobaron por unanimidad. En un caso, el Sr. Porras Cortés reconoció públicamente que la Asamblea Nacional había actuado siguiendo las órdenes del Presidente.

90. El poder judicial ha desempeñado un papel decisivo en la comisión de actos represivos contra opositores reales o percibidos. Hasta enero de 2019, el magistrado de la Corte Suprema Rafael Solís Cerda, aliado de muchos años del Presidente y de la Vicepresidenta, era secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Corte Suprema de Justicia y transmitía órdenes de la Presidencia al poder judicial. Tras la renuncia del Sr. Solís Cerda, asumió el cargo de secretario político el Vicepresidente del Tribunal Supremo, Marvin Aguilar García¹⁹. El Grupo comprobó que el Sr. Aguilar García recibía órdenes de la Vicepresidenta, de dos asesores presidenciales o de la Fiscal General, y luego las comunicaba al resto del poder judicial convocando a su oficina a uno o más jueces de confianza²⁰. Esos magistrados, a su vez, ejecutaban directamente las órdenes o las comunicaban a otros jueces y empleados judiciales.

91. La Fiscal General, Ana Julia Guido Ochoa, también recibe órdenes de la Presidencia sobre a quién procesar. El Grupo confirmó la existencia de una “granja de troles” que se extiende a varias plataformas en línea pertenecientes a Meta, creada para generar pruebas falsas contra opositores reales o percibidos y acosarlos en línea. La “granja” se gestiona desde las instalaciones de la Corte Suprema; posteriormente, el Ministerio Público utiliza las “pruebas” para respaldar las acusaciones contra opositores reales o percibidos.

92. La Presidencia también envía órdenes a Luis Cañas Novoa, Viceministro y secretario político del Ministerio del Interior, sobre la liberación o no de opositores al Gobierno, reales o percibidos, la cancelación de la personalidad jurídica de organismos sin fines de lucro y las decisiones que afectan a la libertad de circulación. El Sr. Cañas Novoa, a su vez, se asegura de que esas órdenes sean ejecutadas por el órgano competente respectivo: el Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Dirección General de Migración y Extranjería.

93. La Dirección General de Migración y Extranjería ha sido responsable de imponer restricciones ilegales y arbitrarias a la entrada y salida del país, tanto de nacionales como de extranjeros, de denegar la expedición de pasaportes o de confiscarlos de manera arbitraria y de denegar a extranjeros la renovación de los permisos de residencia.

94. La Dirección General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro se ha encargado de cancelar la personalidad jurídica de muchas organizaciones, incluidas las religiosas. Con respecto a la cancelación de la personalidad jurídica de las instituciones de educación superior, el Grupo ha observado que el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación han colaborado con la Dirección General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.

95. El Grupo también determinó que la Vicepresidenta de Nicaragua envía órdenes a la Presidenta del Consejo Nacional de Universidades acerca de las políticas universitarias y el

¹⁹ Se ha informado de que, poco antes de que se publicara el presente informe, Aguilar García fue separado del cargo. Hay que investigar las implicaciones de esa decisión. El Grupo también está investigando la función y las responsabilidades de la ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas, antes de ser destituida.

²⁰ Cada circunscripción administrativa establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial está coordinada por jueces de confianza del Gobierno.

control y la represión de los estudiantes, profesores y otro personal universitario que son opositores, reales o percibidos, del Gobierno.

VI. Responsabilidad

A. Responsabilidad del Estado

96. El Grupo tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua es responsable de violaciones y abusos graves, sistemáticos y generalizados de los derechos humanos y de otras violaciones del derecho internacional cometidos por motivos políticos contra miembros de la población que son opositores al Gobierno o percibidos como tales.

97. El Estado no ha garantizado el acceso a recursos efectivos a las víctimas de detenciones arbitrarias y actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las familias de las personas asesinadas en las protestas de 2018. No ha investigado esas violaciones y abusos ni ha procesado a sus autores. El Estado tampoco ha proporcionado acceso a un recurso efectivo a los 317 (puede que la cifra sea más elevada) opositores reales o presuntos que han sido privados arbitrariamente de nacionalidad. El Estado tampoco ha garantizado el acceso a reparación a las víctimas de deportación y de otras violaciones del derecho a la libertad de circulación, como la prohibición de entrar en el propio país.

98. El Estado es responsable de las graves violaciones cometidas en contravención de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño.

99. El Estado también es responsable de haber vulnerado las obligaciones internacionales contraídas en virtud de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Aunque Nicaragua conserva el derecho a regular internamente la nacionalidad, debe hacerlo respetando las normas internacionales en la materia. En este sentido, la práctica de Nicaragua vulnera, en particular, el artículo 9 de la Convención, según el cual los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de personas por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos, prohibición que puede considerarse una obligación *erga omnes partes*.

100. Además, la práctica del Estado de denegar a sus nacionales la entrada en el país también puede constituir una violación del principio de derecho internacional según el cual un Estado no puede negar a sus propios nacionales el derecho de entrada o de residencia en su territorio²¹.

101. Por último, todos los poderes del Estado y las autoridades públicas de ámbito nacional, regional o local, incluidos los grupos no estatales²² que actúan siguiendo instrucciones o bajo la dirección o el control efectivo del Estado, o con su consentimiento o aquiescencia, siguen vulnerando, de forma sistemática y flagrante, la prohibición internacional de los crímenes de lesa humanidad como norma imperativa de derecho internacional general (*ius cogens*).

102. El Grupo considera que el Estado de Nicaragua debe rendir cuentas por las violaciones y abusos graves, sistemáticos y generalizados de los derechos humanos y por las violaciones del derecho internacional descritas y expuestas en el presente informe, así como en el primer informe del Grupo.

²¹ Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, *Van Duyn v. Home Office*, asunto núm. 41/74, sentencia de 4 de diciembre de 1974, párr. 22.

²² Véase el documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo, párrs. 1209 a 1214.

B. Responsabilidad penal individual

103. En su primer informe, el Grupo llegó a la conclusión y encontró motivos razonables para creer que los funcionarios públicos y las autoridades de todos los poderes del Estado y de todos los niveles habían participado en la comisión de violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales. El Grupo recopiló los nombres de los individuos a quienes las víctimas habían identificado como responsables directos de las violaciones, los abusos y crímenes documentados, así como aquellos cuya contribución dentro de las estructuras del Estado podría dar lugar a responsabilidad penal individual en los planos internacional y nacional.

104. Desde la publicación de su primer informe, el Grupo ha recibido información adicional que, al ser evaluada junto con la información obtenida previamente, le ha permitido avanzar en la determinación de la estructura y las cadenas de mando dentro de diversas instituciones, órganos y agencias del Estado, así como realizar un análisis más profundo del papel que desempeñaba cada persona dentro de estas estructuras (véase el anexo). En consonancia con su mandato de rendición de cuentas, el Grupo también ha proseguido sus esfuerzos por identificar a los presuntos autores directos de violaciones, abusos y crímenes, y por recabar información adicional que vincule a los autores directos con otras personas que, desde distintas instancias de las instituciones del Estado, podrían haber contribuido a las violaciones, abusos y crímenes.

105. El Grupo tiene motivos razonables para creer que el Presidente, la Vicepresidenta y otros altos cargos del Estado no solo siguieron ejerciendo un control total sobre todos los poderes, instituciones, órganos y agencias del Estado, así como sobre los grupos no estatales señalados en el presente informe y en los documentos de sesión, sino que además han puesto en marcha y aplicado un plan destinado a suprimir cualquier forma de disidencia persiguiendo a los opositores reales o percibidos, con el fin de conservar el poder. Ese plan comprende la comisión de violaciones y abusos por parte de personas que estaban al servicio de los poderes del Estado, las instituciones estatales y estructuras no estatales señaladas por el Grupo. Las violaciones y los abusos, cuyos detalles han sido plenamente verificados, proporcionan motivos razonables para creer que se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.

106. El Grupo tiene motivos razonables para creer que el Presidente, la Vicepresidenta y los altos cargos del Estado señalados por el Grupo participaron en los crímenes descritos y expuestos en el presente informe y en su primer informe, y por lo tanto considera que deben ser objeto de investigaciones judiciales para que se determine su responsabilidad penal individual. Los autores directos de los crímenes documentados también son responsables de sus actos. También pueden ser responsables de su conducta delictiva sus supervisores inmediatos y otras personas que ocupan puestos superiores de la cadena de mando. Con sujeción a la disponibilidad de recursos, el Grupo seguirá investigando este asunto.

VII. Conclusiones y recomendaciones

107. El Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo y los altos cargos del Estado señalados en los informes del Grupo deben ser objeto de investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y expuestos en el presente informe y en el primer informe del Grupo. Nicaragua también debe rendir cuentas por su posible responsabilidad a nivel de Estado en esos crímenes, violaciones y abusos.

108. Desde que presentó su primer informe, el Grupo ha venido constatando una persecución constante y cada vez más generalizada de cualquier voz disidente en Nicaragua, acompañada de una centralización total de los poderes del Estado en manos del Presidente y la Vicepresidenta, particularmente en lo que se refiere al poder judicial. Esta situación ha dado lugar a la impunidad total de las autoridades, que *de facto* se ha extendido incluso más allá del territorio de Nicaragua.

109. Los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos se han convertido a su vez en víctimas únicamente por ser parientes de opositores reales o

percibidos. Estas violaciones por asociación son especialmente graves cuando afectan a niños.

110. El Grupo pudo corroborar la información contenida en su primer informe acerca de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

111. Se han perpetrado violaciones, abusos y crímenes no solo con el fin de dismantelar los esfuerzos de oposición activa, sino también para silenciar todas las voces críticas y disuadir a largo plazo de emprender cualquier nueva iniciativa de organización o movilización. En el sector universitario nicaragüense ya no existen instituciones autónomas, las autoridades han reprimido todo movimiento organizado y toda voz crítica de estudiantes y profesores universitarios. El Gobierno también sofocó las voces críticas del movimiento campesino, y va avanzando hacia su objetivo de acabar de forma permanente con las voces críticas organizadas de los Pueblos Indígenas, las personas afrodescendientes y de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas de Nicaragua a largo plazo.

112. La primera fase de la represión se caracterizó por unos patrones de violaciones y abusos del derecho a la vida, a la seguridad e integridad de la persona, con los que se pretendía suprimir cualquier manifestación crítica de los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y asociación pacíficas. Hoy en día, las autoridades están más cerca de lograr su objetivo de destrucción total de cualquier voz crítica en Nicaragua, ya que los patrones de violaciones se centran en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo.

113. Entre los patrones de las violaciones que están utilizando las autoridades cabe destacar: la expulsión del país de nacionales y extranjeros, la privación del derecho a la nacionalidad nicaragüense, la denegación de entrada o de salida del territorio de Nicaragua y la creación de un entorno intimidatorio o coercitivo. La acumulación de actos represivos está obligando a muchas personas a abandonar el país, lo que constituye una forma de expulsión. Todos los nicaragüenses que han abandonado el país desde abril de 2018 y que fueron entrevistados por el Grupo habían sufrido una o más de las violaciones y abusos documentados por el Grupo en el presente informe y en su primer informe.

114. Las víctimas de estas violaciones se vieron —y siguen viéndose— privadas de sus medios de vida: trabajo e ingresos, cuentas bancarias y otros activos, derechos de pensión, actas de nacimiento, registros académicos y profesionales, e incluso la vida familiar.

115. La sistematicidad y duración de los patrones de violaciones observados por el Grupo indican, además de su carácter deliberado, que se llevaron a cabo a sabiendas del profundo efecto que tendrían sobre los derechos humanos de la población en general y sobre el Estado a largo plazo.

116. El Grupo concluye que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta tal punto que se necesitarán muchos años y considerables recursos para llegar a una situación regida por el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

117. El Grupo reitera las recomendaciones al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional que presentó en su primer informe y amplió en el documento de sesión²³, así como las recomendaciones presentadas en el informe oral durante el 54º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos²⁴.

²³ A/HRC/52/63, párrs. 126 y 127; y documento de sesión que recoge las conclusiones detalladas del Grupo, párrs. 1236 y 1237.

²⁴ Véase https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/grhe-nicaragua/OA-GHREN-54HRC-12SEP23_Spanish.docx.

118. Además, con miras a mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el Grupo recomienda a la comunidad internacional que:

a) Exija al Estado de Nicaragua que rinda cuentas de las obligaciones que contrajo en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia;

b) Con respecto a los nicaragüenses privados de nacionalidad, obligados a salir de Nicaragua o a quienes se ha negado la entrada en el territorio de Nicaragua, o que han huido del país:

i) Utilice las constataciones y conclusiones del Grupo para garantizar un acceso justo y eficaz a los procedimientos de identificación, remisión y determinación de la condición de refugiado;

ii) Aplique los criterios más amplios para el reconocimiento de la condición de refugiado de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados;

c) Vele por que las constataciones y conclusiones del Grupo se tengan en cuenta en las relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales, en particular:

i) Al evaluar el cumplimiento por parte de Nicaragua de las normas contra el lavado de dinero, la lucha contra la financiación del terrorismo y de la proliferación, especialmente con respecto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, aplicando el principio de “no ocasionar daño”;

ii) Con respecto a las consultas del Artículo IV que mantiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) con Nicaragua, al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos del FMI, así como la relación entre la emigración, las remesas, el crecimiento del producto interno bruto y la participación en la fuerza de trabajo de Nicaragua;

iii) Al condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de objetivos de política no comercial o al evaluar los efectos sobre los derechos humanos de mantener relaciones comerciales con Nicaragua;

d) Mejore la capacidad de los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses.

Estructura de poder del Estado de Nicaragua

